

## IGUALDADES Y DESIGUALDADES EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ESPAÑA FRENTE A LA APLICACIÓN DE LA LEY 39 DE 2006

Sobre la diversificación y la desigualdad en cuanto a la protección de las normas, se otorga a las Comunidades Autónomas la legitimación del principio de autogobierno para su planificación y con diferencias en el territorio nacional; asimismo, respecto a las diferentes leyes de servicios sociales, dan un panorama de aparente homogeneidad, pero la realidad muestra una puesta en práctica desigual y un insuficiente desarrollo normativo que impiden lograr los objetivos en los mismos enunciados o cuyo logro dependerá del interés puesto en programas específicos por parte de una comunidad autónoma.

Los servicios sociales desde el comienzo se preocupan de la desigualdad, lo que podría generar diversas normativas; en este sentido, desde una parte se puede establecer una concepción unitaria de la política de bienestar social financiada con cargo a los presupuestos generales del Estado, englobando la asistencia social y los servicios sociales articulada dentro de un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos o dentro de un sistema público de servicios sociales. Por otra parte, la descentralización era primordial para la funcionalización del sistema, tiene una cercanía mayor y de gran importancia, más eficaz y un mejor servicio, como

Menciona el artículo 148.1.1<sup>280</sup> de la Constitución Española; por tanto, la legislación autonómica se ha impuesto definitivamente como medio de modelo de sistema público, recayendo las responsabilidades en los entes autonómicos y locales.

De esta forma, si no se obtuvieran las competencias oportunas en esta materia, la administración general procuraría asegurar los niveles básicos de servicios para todo el Estado, facilitando los servicios que quedaron fuera del alcance de las Comunidades Autónomas y coordinando para realizar y reforzar aquellos puntos comunes que ayudarán a visualizar algo que se iba pareciendo a un sistema, esto es, a un conjunto estructurado de organizaciones formales. Se materializa a lo largo de los planes concertados, desarrollando las prestaciones sociales básicas que se configuraron en el mecanismo de coordinación entre la administración general del Estado y las Comunidades Autónomas<sup>281</sup>, para lo cual ha existido una cofinanciación entre los distintos proyectos.

Así, mediante una igualdad básica en todo el territorio nacional para la protección de los dependientes, y con la influencia de la Ley 51 de 2003 para la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad<sup>282</sup>, el legislador tomó como referencia, a efectos competenciales, el artículo 149.1.1<sup>283</sup> de la Constitución Española, así como los derechos sociales encaminados a asegurar un cierto grado básico de servicios para todo el Estado español, con la garantía en el desarrollo del individuo y sus colectivos por medio de una intervención estatal en la prestación de servicios y la distribución de bienes.

Por otro lado, la disposición final octava de la Ley 39 de 2006<sup>284</sup>, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de depen-

.....  
 280 Constitución española, *op cit.*, artículo 148.1.1: "Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: 1) Organización de sus instituciones de autogobierno".

281 La cooperación se plasmó por medio de un convenio administrativo cuyo objetivo era el reforzar las corporaciones locales respecto a la prestación de servicios sociales en lo referido al acuerdo con la disposición en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.

282 Ley 51 de 2003, del 3 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, *Boletín Oficial del Estado (BOE)* 289.

283 Constitución española, *op. cit.*, artículo 149.1.1: "La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en su cumplimiento de los deberes constitucionales".

284 Jefatura del Estado, Ley 39 de 2006, del 14 de diciembre, De promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, *Boletín Oficial del Estado (BOE)* 299.

dencia, se funda según la competencia que el artículo 149.1.1<sup>285</sup> de la Constitución atribuye al Estado para la regulación de la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, por lo que este precepto es demasiado corto observando la ley. Asimismo, el anteproyecto de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia dictamina que “debe acogerse a un título competencial claro y sólido, en evitación de posibles conflictos de competencias que puedan derivarse de una ambigüedad en este extremo”. En este sentido, encuentra su justificación en la homogeneidad de las políticas de protección de los discapacitados dependientes en las distintas Comunidades Autónomas. Teniendo en cuenta lo anterior, Rodríguez-Piñero menciona:

Las Comunidades Autónomas y el Estado Español deben coordinarse y complementarse para que exista un sistema equilibrado y global para la cobertura de las necesidades sociales y para el reparto adecuado de las tareas entre la Seguridad Social y la Asistencia Social al servicio de la ciudadanía, siendo esta labor que no suple la jurisprudencia constitucional<sup>286</sup>.

De esta forma, la distribución de competencias del Estado español se configura por medio del artículo 149.1.1<sup>287</sup> de la Constitución Española, que tiene una gran importancia en el juego de las Comunidades Autónomas en el Sistema para la Autonomía y Atención de los Dependientes; un sistema en el que colaboran y participan todas las administraciones públicas.

El objeto de la Ley 39 de 2006 tiende a requerir un compromiso y la actuación de todos los poderes e instituciones públicas; por tanto, hace necesaria la coordinación y cooperación de las Comunidades Autónomas. En este sentido, cabe mencionar a Barcelón, que manifiesta a este respecto:

Ante la inexistencia de mecanismos constitucionales claros y explícitos de cooperación y colaboración, el artículo 149.1.1 de la Constitución Española es realmente

285 Constitución española, *op. cit.*, artículo 149.1.1: “La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales”.

286 Miguel Rodríguez-Piñero Royo, “Seguridad Social y Asistencia Social en el Estado de las Autonomías”, *Revista Crítica de Teoría y Práctica*, n.º 1 (2003): 118.

287 Constitución española, *op. cit.*, artículo 149.1.1: “La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en su cumplimiento de los deberes constitucionales”.

un elemento de equilibrio que se ofrece para la cohesión en la protección de carácter poliédrico de la dependencia<sup>288</sup>.

En suma, cabe señalar que el Estado delega la potestad a las Comunidades Autónomas, lo que implica una descentralización en la Ley de Dependencia.

### **El desarrollo competencial en las Comunidades Autónomas en la materia de la autonomía y atención de la dependencia**

La Ley 39 de 2006<sup>289</sup> se adecúa a “un gran pacto” del Estado con las Comunidades Autónomas para la atención de las personas dependientes, con reconocimiento Estatal, por ser prestaciones que se encarnan en los servicios sociales y desempeñan un gran papel las Comunidades Autónomas, pues estas son titulares de la competencia en la materia de asistencia social.

Al observar la norma, se desglosa el factor que tiene el Estado español en la coordinación del sistema de protección de la dependencia, con una cierta uniformidad en la regulación de la materia y estableciendo un nivel mínimo en todo el territorio nacional; cuenta la participación en el sistema las Comunidades Autónomas y en todas las administraciones públicas. Así, el objeto de la Ley 39 de 2006 se señala en su exposición de motivos:

Tiene un compromiso y una actuación conjunta de todos los poderes e instituciones públicas, porque la coordinación y la cooperación entre Comunidades es un elemento fundamental y se declara en la norma, estableciendo uno de tantos principios que fundamentan “la cooperación administrativa<sup>290</sup>”.

Por tanto, es uno de los cauces más imperantes para la colaboración y participación de las administraciones públicas, ejercitando sus respectivas competencias en lo que concierne a la protección de la dependencia del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia; por ello, se debe hacer referencia al Consejo Territorial, que más adelante se desglosa.

288 Susana Barcelón Cobedo, Las situaciones de dependencia personal como nueva contingencia protegida por el Sistema de Protección Social, *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, n.º 60 (2006).

289 Jefatura del Estado, Ley 39 de 2006, *op. cit.*

290 11 *Ibid.*

## La dependencia y su regulación autonómica en la Comunidad Valenciana

En el contexto de la dependencia, puede entenderse no solamente que se proteja una cobertura mínima de este derecho de acción social en el ámbito material donde se enmarca, sino que a la vez se intenten buscar las condiciones básicas para el ejercicio de toda la población española, cualquiera que sea el territorio donde se viva. Asimismo, el legislador está obligado a reconocer la existencia de distintos niveles que dependerán de los acuerdos entre la administración general del Estado y las distintas Comunidades Autónomas, por lo que es imperativo que el primero tenga la obligación de intervenir en la nueva configuración que constituye una modalidad de protección social amplia y que complementa la acción protectora del Estado junto al Sistema de la Seguridad Social, potenciando el avance del modelo de Estado social.

Es evidente que el legislador estatal crea un nuevo sistema de protección social frente a las situaciones de dependencia, con la agregación autonómica que se identifica como el Sistema para la Atención a la Dependencia. En sí, la cobertura que ofrece el artículo 149.1.1<sup>291</sup> de la Constitución Española solo permite ordenar y limitar el ejercicio de las competencias en materia de asistencia social de las Comunidades Autónomas, por medio de normas básicas que dejan espacio a la diferenciación autonómica en su propio autogobierno.

Por todo lo expuesto, se refleja un modelo de coordinación por el marco legal establecido, que trata de formular las bases para la colaboración y la participación de todas las administraciones públicas en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. De igual manera, en la Comunidad Valenciana, la Generalitat Valenciana tiene la competencia exclusiva en materia de servicios sociales con atención a lo dispuesto en el artículo 49.1.27<sup>292</sup> del Estatuto de Autonomía, además del correspondiente desarrollo, en su ámbito territorial, de la Ley 39 de 2006<sup>293</sup>.

291 Constitución Española y Constitución Europea (2006), *op. cit.*, p.57.

292 Jefatura del Estado, Ley Orgánica 5 de 1982, del 1 de julio, de Estatuto de Autonomía Valenciana, *Boletín Oficial del Estado* (BOE) 164. Artículo 49.1.27: "1. La Generalitat tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 27.ª Instituciones públicas de protección y ayuda de menores, jóvenes, emigrantes, tercera edad, personas con discapacidad y otros grupos o sectores necesitados de protección especial, incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación".

293 Jefatura del Estado, Ley 39 de 2006, *op. cit.*

*La regulación autonómica de la dependencia en la Comunidad Valenciana*

En la gestión del ámbito territorial, los servicios y los recursos necesarios para la valoración y atención a los dependientes<sup>294</sup> corresponden a las Comunidades Autónomas, las cuales emitirán un dictamen sobre el grado de dependencia, con especificación de los cuidados que la persona requiere<sup>295</sup>. Por otro lado, se encuentra la planificación, coordinación y dirección en el ámbito de cada territorio respecto a los servicios de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia<sup>296</sup>.

Cabe recordar los procedimientos de coordinación sociosanitaria que crean los órganos de coordinación para garantizar una efectiva atención<sup>297</sup>. Al mismo tiempo, les corresponde fijar el régimen jurídico y las condiciones de actividad de los centros privados concertados<sup>298</sup>, creando, manteniendo y actualizando el registro de centros y servicios, lo cual facilita la debida acreditación en función

294 *Ibíd.* Artículo 11.1: "1. En el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, corresponden a las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de las competencias que les son propias según la Constitución Española los Estatutos de Autonomía y la legislación vigente, las siguientes funciones: [...] b) Gestionar, en su ámbito territorial, los servicios y recursos necesarios para la valoración y atención de la Dependencia".

295 *Ibíd.* El artículo 27.1 señala: "1. Las comunidades autónomas determinarán los órganos de valoración de la situación de dependencia que emitirán un dictamen sobre el grado de dependencia con especificación de los cuidados que la persona pueda requerir. El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia deberá acordar unos criterios comunes de composición y actuación de los órganos de valoración de las comunidades autónomas que, en todo caso, tendrán carácter público".

296 *Ibíd.* El artículo 11.1 estipula: "1. En el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, corresponden a las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de las competencias que les son propias según la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la legislación vigente, las siguientes funciones: a) Planificar, ordenar, coordinar y dirigir, en el ámbito de su territorio, los servicios de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia".

297 *Ibíd.* El artículo 11.1 reza: "1. En el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, corresponden a las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de las competencias que les son propias según la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la legislación vigente, las siguientes funciones: [...] c) Establecer los procedimientos de coordinación sociosanitaria, creando, en su caso, los órganos de coordinación que procedan para garantizar una efectiva atención".

298 *Ibíd.* El artículo 16.2 expresa: "1. Las prestaciones y servicios establecidos en esta Ley se integran en la Red de Servicios Sociales de las respectivas Comunidades Autónomas en el ámbito de las competencias que las mismas tienen asumidas. La red de centros estará formada por los centros públicos de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales, los centros de referencia estatal para la promoción de la autonomía personal y para la atención y cuidado de situaciones de dependencia, así como los privados concertados debidamente acreditados. 2. Las Comunidades Autónomas establecerán el régimen jurídico y las condiciones de actuación de los centros privados concertados. En su incorporación a la red se tendrá en cuenta de manera especial los correspondientes al tercer sector".

de garantizar el cumplimiento de los requisitos y los estándares de calidad<sup>299</sup>. También tienen la obligación de desarrollar el cuadro de infracciones y sanciones que están recogidas en la Ley 39 de 2006<sup>300</sup>, a la vez que ejercen funciones de ejecución, como es el caso de la inspección y, en su caso, la sanción de los incumplimientos sobre los requisitos y los estándares de calidad de centros y servicios. Por otro lado, también se evalúa periódicamente el funcionamiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia; en la misma línea, aportan a la Administración General la información necesaria para la aplicación de los criterios de financiación<sup>301</sup>.

En el cuadro de las situaciones de la dependencia está claro que las Comunidades Autónomas tienen un importante protagonismo en la realización del derecho en relación con la protección frente a la dependencia, pero centrándose en competencias de ejecución y, por tanto, de gestión de los servicios y las prestaciones. De esta forma, las competencias normativas que disponen tienen una clara identificación con la organización y regulación de los órganos de valoración de la dependencia, tanto los reconocimientos del derecho, la ordenación de los servicios, el régimen de acreditación y la actuación de los centros privados concertados.

### *La atribución competencial de funciones y servicios*

El artículo 49.2<sup>302</sup> del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana establece que la Generalitat tiene competencia exclusiva en la materia de servicios sociales y de las instituciones públicas de protección y ayuda a los menores,

299 Ibid. El artículo 11.1 expresa: "1. En el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, corresponden a las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de las competencias que les son propias según la Constitución Española los Estatutos de Autonomía y la legislación vigente, las siguientes funciones: [...] d) Crear y actualizar el Registro de Centros y Servicios, facilitando la debida acreditación que garantice el cumplimiento de los requisitos y los estándares de calidad.

300 Ibid. El artículo 47.1 dice: "1. Las Comunidades Autónomas desarrollarán el cuadro de infracciones y sanciones previstas en la presente Ley".

301 Ibid. Expresa el artículo 32.2: "La aportación de la Comunidad Autónoma será, para cada año, al menos igual a la de la Administración General del Estado como consecuencia de lo previsto en este apartado y en el anterior".

302 Jefatura del Estado, Ley Orgánica 5 de 1982, *op. cit.*, artículo 49.2: "La Generalitat tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: [...] 2. La Generalitat tiene competencia exclusiva sobre aquellas otras materias que este Estatuto atribuya expresamente como exclusivas y las que con este carácter y mediante Ley Orgánica sean transferidas por el Estado".

jóvenes, emigrantes, persona de la tercera edad, personas con discapacidad y otros grupos o sectores necesitados de protección, reinserción o rehabilitación. Así, el Real Decreto 251 de 1982, sobre transferencias de competencias, funciones y servicios del Estado en materia de servicios y asistencia sociales<sup>303</sup>, además del Real Decreto 2135 de 1984<sup>304</sup>, llevó a cabo el traspaso de las funciones y servicios sociales del Estado, en tanto que el Real Decreto 264 de 1985<sup>305</sup> realizó dicho traspaso en el marco de la seguridad social.

### *La organización autonómica en la Comunidad Valenciana*

El Sistema de Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana tiene su estructuración en dos niveles para realizar intervenciones: un nivel se enmarca en servicios sociales generales o comunitarios; el otro nivel se centra en servicios especializados. Así, los servicios sociales generales constituyen la estructura básica del sistema y tienden a proporcionar una atención integrada, polivalente, dirigida a toda la población, con su correspondiente programación, implantación y gestión en la intervención general de la atención primaria. Su prestación se realiza por equipos interdisciplinarios en centros sociales dependientes de la Administración local; al mismo tiempo, los servicios sociales generales están integrados por el servicio de información, orientación y asesoramiento técnico, ayuda a domicilio, cooperación social; los programas de convivencia, prevención y reinserción social; y los programas de gestión de prestaciones económicas y de prevención.

Frente a lo anterior, Martínez manifiesta: “Los servicios sociales especializados están dirigidos a sectores de la población que por sus características necesitan de una atención más específica a efectos técnico como profesional”<sup>306</sup>. Por

303 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Real Decreto 251 de 1982, del 15 de enero, transferencias de competencias, funciones y servicios del Estado en materia de Servicios y Asistencia Sociales, *Boletín Oficial del Estado (BOE)* 39.

304 Presidencia del Gobierno, Real Decreto 2135 de 1984, del 10 de octubre, sobre ampliación del traspaso de funciones y servicios ya adaptación de los medios transferidos en régimen preautonómico a la Comunidad Autónoma de Valencia en materia de asistencia y servicios sociales, *Boletín Oficial del Estado (BOE)* 287.

305 Presidencia del Gobierno, Real Decreto 264 de 1985, del 23 de enero, sobre traspaso a la comunidad valenciana de funciones y servicios del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) de la seguridad social, *Boletín Oficial del Estado (BOE)* 58.

306 Luis Martínez-Sigluna Sepúlveda, “La organización administrativa de los servicios para la discapacidad en las Comunidades Autónomas y otras administraciones”, en AA. VV. *Tratado sobre discapacidad* (Navarra: Aranzadi, 2007): 1457.



consiguiente, se constata en el artículo 5 de la Ley 5 de 1997<sup>307</sup>, donde se expresan las competencias de la Generalitat Valenciana por medio de la Conselleria competente, que se destaca la elaboración de las distintas actuaciones de las administraciones públicas y la iniciativa privada en el establecimiento de las prioridades frente a la programación de las actuaciones. Para ello, se estipulan unas prelación en el programa de actuación, en las inversiones y en la puesta en marcha de los centros dedicados a la prestación de servicios sociales, con un establecimiento de un mínimo de calidad que han de cumplir todos en la creación y gestión de los servicios, centros y prestaciones, sin que exista perjuicio en la colaboración de otras entidades.

Posterior a ello, la Ley 11 de 2003<sup>308</sup>, en la que se aprueba el estatuto de personas con discapacidad y que regula la actuación de las administraciones públicas valencianas, está dirigida a la atención y promoción del bienestar y la calidad de vida de las personas con discapacidad, también determina las competencias de la administración de la Generalitat<sup>309</sup>. Entre sus actuaciones se encuentran la

307 Comunidad Valenciana, Ley 57 de 1997, del 25 de junio, por la que se regula el Sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana, *Boletín Oficial del Estado (BOE)* 192. El artículo 5 se señala: "Corresponden a la administración de la Generalitat, a través de la Conselleria competente en materia de servicios sociales, las siguientes actuaciones: a) Elaborar un plan general de servicios sociales de carácter plurianual que tendría como objetivo reducir los desequilibrios territoriales y las deficiencias estructurales en dicha materia en el ámbito de la Comunidad Valenciana. A tal fin deberá ser oído el Consejo de Bienestar Social establecido en la ley. b) Coordinar las actuaciones de las distintas administraciones públicas y de la iniciativa privada, a fin de racionalizar y optimizar el uso de los recursos disponibles en materia de servicios sociales".

308 Comunidad Valenciana, Ley 11 de 2003, del 10 de abril, en la que se aprueba el Estatuto de Personas con Discapacidad Presidencia de la Generalitat, *Boletín Oficial del Estado (BOE)* 122.

309 *Ibid.* El artículo 5 establece: "Corresponden a la Administración de la Generalitat, por medio de la Conselleria competente en materia de atención a las personas con discapacidad, entre otras, las siguientes actuaciones: a) Aprobar un Plan Integral de Actuación para las personas con discapacidad de la Comunidad Valenciana, de carácter cuatrienal, con dotación presupuestaria propia, que tendrá como objetivos orientar, consolidar y establecer prioridades en las actuaciones e inversiones públicas y privadas en la materia objeto de esta ley. b) Investigar, formar, sensibilizar y difundir en la realidad que presenta el sector social de las personas con discapacidad, prestando especial atención a sus características específicas y necesidades. c) Disponer y organizar la recogida de datos estadísticos elaborando censos específicos de la demanda de servicios existentes y de los recursos disponibles, así como identificar nuevas necesidades, todo ello conforme con lo dispuesto en la legislación estatal de protección de datos de carácter personal. d) Establecer los criterios de calidad que han de cumplir todos los centros y servicios que actúen en el ámbito de las personas con discapacidad, con el fin de garantizar las condiciones en que estos son atendidos. Asimismo, también será competencia de la Generalitat el establecimiento de mecanismos de supervisión y control de la citada calidad en la actividad de los centros y en la prestación de servicios generalizados que reciben las personas con discapacidad, sean estos de titularidad pública, de entidades sin ánimo de lucro o de iniciativa privada. e) Asesorar y apoyar, técnica y económicamente, a las entidades locales y organizaciones y asociaciones públicas, especialmente la iniciativa social sin ánimo de lucro, que se dedican a colaborar en la creación, gestión, promoción y desarrollo de planes y programas de promoción de las personas con discapacidad; en la creación y gestión de los centros y en las prestaciones de los servicios regulados por la presente ley.

aprobación del Plan Integral de Actuación de forma cuatrienal, la sensibilización social, la elaboración de estadísticas de personas con discapacidad, el establecimiento de criterios de calidad que tengan que cumplir los centros y servicios, y el asesoramiento, apoyo técnico y económico a entidades y organizaciones, asociaciones públicas y privadas, con la coordinación de las distintas administraciones públicas.

En la actualidad, en el Consell de la Generalitat se crea la Conselleria de Bienestar Social, a la que le corresponden las competencias en la materia de políticas a favor de las personas discapacitadas. Asimismo, esta conselleria de se estructura mediante una Dirección General de Integración Social de Discapacitados, que tiene las funciones en materia de política integral de rehabilitación y tratamiento de las personas con discapacidad, integración, eliminación de barreras físicas y de comunicación.

La atribución de esta Dirección General de Integración Social de Discapacitados consta en la prestación de los servicios y la gestión de los centros para las personas con discapacidad que tengan la titularidad de la Generalitat Valenciana. Entre ellas, tiene atribución de dirección en las materias siguientes: la asistencia técnica y la autorización a los centros y servicios; la protección de la persona o los bienes de los incapacitados, siempre que estén sometidos a cargos de tutela de la Generalitat; y la gestión de conciertos, subvenciones y otro tipo de prestaciones económicas en materia de su competencia. Así, por efectos territoriales, la Conselleria tiene su estructuración de direcciones territoriales de bienestar social en cada una de las capitales de las provincias que componen la Comunidad Valenciana.

En otro ámbito, la Generalitat Valenciana tiene una comisión interdepartamental cuyo objetivo es la integración de las personas con discapacidad, regentada por el presidente de la Generalitat e integrada por un total de trece vocales, entre los que se encuentran el vicepresidente del Consell y siete titulares de Consellerias; en la misma línea se encuentra el Instituto Valenciano de Atención

---

Con el fin, dentro del respeto a la normativa vigente en la materia, se promoverá el establecimiento de los convenios de colaboración y la celebración de conciertos regulados en los artículos 50 y siguientes de la presente ley, que se estimen convenientes para el cumplimiento adecuado de objetivos previstos legalmente. f) Coordinar las actuaciones de las distintas Administraciones Públicas, sin perjuicio del respeto a su ámbito específico de competencias, y de la iniciativa social sin ánimo de lucro y privada, a fin de racionalizar y optimizar el uso de los recursos disponibles".

a los Discapacitados, adscrito a la Conselleria de Bienestar Social, una entidad de derecho público cuyo objetivo es la protección, tutela e inserción sociolaboral de los discapacitados psíquicos y otro tipo de discapacidades, con el encargo de la prestación de los servicios sociales.

Por otro lado, cabe mencionar la figura del defensor del discapacitado, órgano comisionado por el Gobierno valenciano para defender los derechos de los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, y especialmente para la promoción y plena integración en la sociedad de la persona con discapacidad. El defensor del discapacitado es nombrado por el titular de la Conselleria competente; su función es recibir y tramitar las quejas, con información de los órganos administrativos, analizando la situación de las administraciones públicas y también de la iniciativa privada, con la puesta en conocimiento de las autoridades competentes sobre las irregularidades y elevando las propuestas o recomendaciones al Gobierno valenciano.

### *El Consejo Valenciano de Bienestar Social*

El Consejo Valenciano de Bienestar Social tiene las funciones de órgano de participación en materia de los servicios sociales. Asimismo, tiene las facultades de ejercer el asesoramiento al Gobierno valenciano en materia de servicios sociales; conocer, valorar e informar de los proyectos legislativos y la planificación sectorial; promover el asociacionismo; fomentar actividades de promoción y desarrollo social; fomentar la participación de los diversos sectores sociales con las restantes administraciones públicas, creando consejos de bienestar social en un ámbito local, comarcal o provincial. Por tanto, el Consejo de Bienestar Social está adscrito a la Conselleria de Bienestar Social y obtiene los recursos económicos que le sean designados en los presupuestos de la Generalitat valenciana.

### *El Consejo Interterritorial de Servicios Sociales, Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia de la Comunidad Valenciana*

En los antecedentes se puede asociar su regulación en el sistema de servicios al aspecto territorial de la Comunidad Valenciana mediante la realización de asignaciones de las competencias requeridas para su desarrollo normativo. Al mismo tiempo, su función es la de coordinar las políticas con las distintas administraciones

públicas de la Comunidad Valenciana en materia de servicios sociales, además de la creación y regulación del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales. En sí, es un órgano que coordina, coopera e informa entre la Generalitat y las distintas entidades locales de la Comunidad, con el fundamento de crear cohesión del sistema de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia.

Por tanto, entre las funciones que también ostenta el Pleno del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales se encuentra la de conocer la situación de las prestaciones, asesoramiento en planificación y coordinación de las actuaciones, siempre en materia de servicios sociales, elevando estas propuestas y asesorando a la Conselleria de Bienestar Social y al Consejo Valenciano de Bienestar Social, también aprobando los reglamentos del funcionamiento del propio consejo.

### *La legislación de la dependencia en la Comunidad Valenciana*

El Decreto 171 de 2007 del Consell<sup>310</sup>, por el que establece el procedimiento para reconocer a las prestaciones del sistema valenciano para las personas dependientes, demuestra su relación con la Ley 39 de 2007<sup>311</sup>, por cuanto participa con todas las administraciones públicas. En sí, el Decreto 171 de 2007<sup>312</sup> tiene las funciones de regulación, composición y valoración de las personas dependientes, el procedimiento de valoración y reconocimiento de situación de dependencia y el derecho de los servicios y prestaciones que ofrece el sistema valenciano de atención a la dependencia.

### *Competencia, función y composición de los órganos en la Comunidad Valenciana*

Tienen la competencia para resolver las solicitudes de reconocimiento y, por consiguiente, las prestaciones que ofrece el Sistema Valenciano de Atención a la Dependencia a la Secretaría Autonómica de Bienestar Social. Por tanto, en la misma Conselleria de Bienestar Social se crea la Comisión de Valoración, constituido como órgano colegiado, dependiente de la Secretaría Autonómica de

310 Conselleria de Bienestar Social, Decreto 171 de 2007, de 28 de septiembre, del Consell, por el que se establece el procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas en situación de dependencia, *Boletín Oficial del Estado (BOE)* 65.

311 Jefatura del Estado, Ley 39 de 2006, *op. cit.*

312 Decreto 171 de 2007, *op. cit.*

Bienestar Social y cuya función es emitir dictámenes técnicos de valoración de dependencia.

De acuerdo con lo anterior, entre las funciones que ostenta está la emisión de dictámenes técnicos sobre dependencia, con especificación de los cuidados requeridos del dependiente, que es una valoración para la presentación, ante el órgano administrativo competente, del reconocimiento de la situación de dependencia. Otra función que tiene la Comisión de Valoración es el ejercicio de la asistencia técnica y el asesoramiento, cuando sea requerido, en cuanto a los procedimientos contenciosos administrativos, siempre que sea órgano gestor; su composición está formada por un técnico de la Dirección General de Acción Social, un técnico de la Dirección General para las Personas con discapacidad y tres técnicos de la Secretaría Autonómica de Bienestar Social, pudiéndose incorporar en ciertos casos personal técnico de la Conselleria de Bienestar Social con varias titulaciones tanto en el área social como sanitaria, siempre coordinadas por la Secretaría Autonómica de Bienestar Social, y existiendo una “libre designación” para las personas en el órgano competente y las resoluciones de reconocimiento de la situación de dependencia.

De esta forma, todos los dictámenes emitidos por la comisión tienen que contener el diagnóstico, la situación, el grado y los cuidados de la persona dependiente; cabe mencionar el artículo 30<sup>313</sup> de la Ley 39 de 2006, y también se observará en otras normas, respecto a la diferencia que contempla la legislación autónoma, pues se puede elevar a definitiva o temporal la calificación de dependencia. Así, el inicio del procedimiento de revisión podrá llevarlo a cabo el propio interesado, su representante legal o el guardador de hecho y el titular de la Secretaría Autonómica de Bienestar Social; este último dictará y notificará la resolución expresa en el procedimiento que se ha iniciado para la revisión del reconocimiento de la situación de dependencia.

313 Jefatura del Estado, Ley 39 de 2006, *op. cit.* Artículo 30: “El grado o nivel de dependencia será revisable, a instancia del interesado o de sus representantes o de oficio por la Administración Pública competente”.

*El procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y las prestaciones del sistema en la Comunidad Valenciana*

El reconocimiento de dependencia se iniciará por medio del interesado, siempre que no sea discapacitado civil, pues en este caso será por medio de su representante legal. Por otro lado, es importante tener en cuenta las condiciones que exige: la acreditación de cinco años de permanencia en territorio español y dos en la Comunidad Autónoma Valenciana; por tanto, no se obtendría la viabilidad necesaria si hubiera vivido en otra comunidad. Uno de los requisitos más importante es el papel que ejercen los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana en su servicio municipal de atención a la dependencia, siempre que se haya suscrito el oportuno convenio en el registro municipal o en las direcciones territoriales<sup>314</sup>.

El área de coordinación de la Secretaría Autonómica de Bienestar Social tiene la competencia para instruir el procedimiento, que se realizará de oficio siempre que sea procedente para la resolución. De esta forma, el Decreto 171 de 2007<sup>315</sup> crea la figura del perito, cuando dice en su artículo 9.1, párrafo tercero, que “podrá solicitar informe de otros profesionales cuando considere necesario”. Queda claro que el mismo órgano podrá elaborar un informe sobre la persona dependiente, por medio de otros profesionales no adscritos a la Conselleria de Bienestar Social. Asimismo, el Decreto 171 de 2007 entra en valoraciones de carácter procedimental más elaboradas que la Ley 39 de 2006<sup>316</sup>.

Una vez realizados todos los procedimientos, la Comisión de Valoración podrá recabar cuantas informaciones necesite para la formulación de sus dictámenes, solicitando tanto la valoración de los propios profesionales como anteriormente había citado por medio de peritos ajenos a la Conselleria. El área de coordinación lo elevará al órgano competente para la resolución de la dependencia, con la existencia del principio de confidencialidad.

De esta forma, respecto a la resolución, el titular de la Secretaría Autonómica de Bienestar Social de la Conselleria de Bienestar Social dictará la resolución,

314 Conselleria de Bienestar Social, Decreto 171 de 2007, *op. cit.*, artículo 8: “Las personas solicitantes por homologación, que tuvieran reconocida previamente la pensión de gran invalidez, deberán presentar copia compulsada de la resolución de reconocimiento de la misma”.

315 *Ibíd.*

316 Jefatura del Estado, Ley 39 de 2006, *op. cit.*

que es procedente para el reconocimiento de la situación de dependencia con sus respectivos derechos, así como los servicios y prestaciones reconocidos. Ello aplicará en la resolución de agravación o mejoría, así como en todas las normativas vistas y que se producirán a partir del día siguiente a la fecha de presentación de solicitud de revisión el registro correspondiente.

En el programa individual de atención, el Decreto 171 de 2007<sup>317</sup> señala la importancia del concurso de los servicios municipales, los cuales establecerán un servicio del programa de atención a la dependencia; por tanto, la norma establece una novedad en el procedimiento de urgencia siempre que esté justificado por la comisión de valoración, siendo valorada de forma prioritaria, con la respectiva regularización administrativa. De todas formas, la ley de la Comunidad Valenciana es criticable en la medida en que exige requisitos como los cinco años de permanencia en territorio español y dos en la Comunidad Autónoma Valenciana, por lo que el legislador tanto estatal como de la Comunidad Valenciana deberían modificar las normas, pues queda el dependiente en un claro desamparo normativo.

### *La ley de dependencia en las entidades locales valencianas*

Se puede considerar como entidades locales siempre que la población sea superior a veinte mil habitantes. De esta forma, es posible resaltar que en las entidades locales comprendidas en el territorio de la Comunidad Valenciana se administrarán con autonomía los asuntos propios de acuerdo con la Constitución Española. Se da a entender que las entidades locales tienen plena eficacia para el trámite y el registro de los expedientes de las personas dependientes; se puede decir también que la presentación de la solicitud de dependencia es de carácter preferente en el registro oficial del Ayuntamiento de la Comunidad Valenciana<sup>318</sup>.

Respecto al procedimiento de revisión, están también legitimados para instar la revisión los servicios municipales de atención a la dependencia donde se efectúe el servicio o donde esté empadronado el beneficiario. Con todo esto, se demuestra la independencia de las entidades locales en la Comunidad Valenciana. Por otro lado, se debe resaltar la importancia de los centros y servicios públicos de

317 Conselleria de Bienestar Social, Decreto 171 de 2007, *op. cit.*

318 Conselleria de Bienestar Social, Decreto 171 de 2007, *op. cit.*, artículo 8: "Las personas solicitantes por homologación, que tuvieran reconocida previamente la pensión de gran invalidez, deberán presentar copia compulsada de la resolución de reconocimiento de la misma".

titularidad de las entidades locales de la Comunidad Valenciana y sus organismos, a efectos de la integración de la red de centros tanto a servicios públicos como concertados en el sistema de atención a los dependientes en la Comunidad Valenciana.

### La regulación de la dependencia en las demás Comunidades Autónomas

En cuanto a la proyección de la Ley de 39 de 2006<sup>319</sup>, se puede observar que existen elementos comunes y diferentes en las respectivas Comunidades Autónomas.

#### *Los elementos diferenciadores en las regulaciones autónomas*

En el Principado de Asturias se puede destacar la Ley 1 de 2003, de servicios sociales<sup>320</sup>, la cual distingue la inserción social de las personas con discapacidad; se proyectará entonces hacia el cuidado y el fomento de la inserción social de las personas con necesidades especiales, lo cual consiste en el conjunto de medidas y ayudas técnicas dirigidas a prestar los cuidados necesarios, a desarrollar sus competencias, fomentar su autonomía y favorecer la integración social y la participación. En esta norma se incluyen programas de atención temprana dirigidos a recién nacidos y niños para favorecer su evolución y desarrollo; siguiendo en la misma línea, la Comunidad de Extremadura se centra en la ayuda a domicilio, tiene una atención de carácter rehabilitadora para las personas que necesiten por no poder realizar sus actividades habituales.

#### Las prestaciones para una mejor calidad de vida

En cuanto a los elementos comunes, se puede decir primero que en la Comunidad de Andalucía se destaca la Ley 2 de 1988, de servicios sociales, en cuyo artículo 4 señala: “Los servicios sociales comprenden aquellos recursos, actividades y prestaciones organizadas para la promoción del desarrollo de los individuos y grupos sociales y para la obtención de un mayor bienestar social y una mejor calidad de vida”<sup>321</sup>. En la comunidad de Castilla y León se puede señalar la Ley 5 de

319 Jefatura del Estado, Ley 39 de 2006, *op. cit.*

320 Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, Ley 1 de 2003, del 24 de febrero, de Servicios Sociales, *Boletín Oficial del estado (BOE)* 86.

321 Comunidad Autónoma de Andalucía, Ley 2 de 1988, de Servicios Sociales, *Boletín Oficial del estado (BOE)* 29.



2003, de atención y protección a las personas mayores<sup>322</sup>, que atribuye a la Ley de Servicios Sociales la función de mejorar su calidad de vida, la de sus familias y la de otras personas de su ámbito socioafectivo. También se encuentra la Comunidad de Galicia, en su Ley 4 de 1993, de servicios sociales<sup>323</sup>.

De esta forma, se definen los servicios sociales como un sistema integrado de protección social orientado a la prestación programada de atenciones y servicios que posibiliten la mejora de la calidad de vida y la participación de las personas o grupos, especialmente de aquellos que sufren algún tipo de carencia.

#### Las prestaciones económicas

Respecto a la comunidad de Cataluña, la Ley 13 de 2006, de prestaciones sociales de carácter económico<sup>324</sup>, se centra en el derecho a las prestaciones y en su artículo 23 regula la prestación para atender las necesidades básicas de las personas, siempre que no sean perceptoras de otra modalidad; en la misma línea cabe mencionar la Comunidad de Illes Balears, la cual está articulada su legislación mediante prestaciones técnicas y económicas<sup>325</sup>.

#### La prestación como residencia

La Comunidad de Castilla, en su Ley 3 de 1986<sup>326</sup>, de servicios sociales, se limita a otorgar prestaciones asistenciales mediante la puesta en marcha a disposición de residencias permanentes, como equipamientos sustitutivos del hogar, que deberán acoger preferentemente ancianos con grandes limitaciones para las actividades de la vida diaria, en las que se desarrollarán actividades recuperadoras y se propiciará el contacto con el medio familiar y social. Sin embargo, la Comunidad

---

322 Comunidad de Castilla y León, Ley 5 de 2003, del 3 de abril, de atención y protección a las personas mayores de Castilla y León, *Boletín Oficial del estado (BOE)* 108.

323 Comunidad Autónoma de Galicia, Ley 4 de 1993, del 14 de abril, de servicios sociales, *Boletín Oficial del estado (BOE)* 112.

324 Comunidad Autónoma de Cataluña, Ley 13 de 2006, del 27 de julio, de prestaciones sociales de carácter económico, *Boletín Oficial del estado (BOE)* 201.

325 Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, Ley 9 de 1987, del 11 de febrero, de acción social, *Boletín Oficial del Estado (BOE)* 114.

326 Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, Ley 3 de 1986, del 16 de abril, de servicios sociales, *Boletín Oficial del Estado (BOE)* 174.

de Galicia no contemplaba prestaciones específicas de dependencia en la Ley 4 de 1993, de servicios sociales<sup>327</sup>. Respecto a la Comunidad de Madrid, se puede decir que sí hay un elemento diferenciador poco común en su Ley 11 de 2003, de servicios sociales, tal como quedó expresado en su artículo 2.1:

1. Los servicios sociales tendrán por finalidad la promoción del bienestar de las personas, la prevención de situaciones de riesgo y la compensación de déficits de apoyo social, centrando su interés en los factores de vulnerabilidad o dependencia que, por causas naturales o sobrevenidas, se puedan producir en cada etapa de la vida y traducirse en problemas personales<sup>328</sup>.

En el País Vasco, la Ley 5 de 1996<sup>329</sup> es una ley muy formal que reconoce las prestaciones de servicios o programas de convivencia mediante actuaciones de ayuda en el propio domicilio de la persona interesada; también mediante alojamientos alternativos, aunque no se entendía si los alojamientos alternativos eran residencias, casa propia o ajena.

#### Las prestaciones de apoyo doméstico-social

En la Comunidad Canaria, siguiendo su Ley 9 de 1987<sup>330</sup>, cabe destacar una figura: la prestación de atenciones de carácter doméstico-social de apoyo psicológico, que las demás Comunidades Autónomas no contemplan. La Comunidad de Murcia está en la misma línea de actuación sobre la atención de apoyo psicológico y doméstico que las dos anteriores Comunidades Autónomas citadas, en su Ley 3 de 2003<sup>331</sup>. Prosiguiendo en la misma línea, se puede observar la Comunidad de Extremadura, pues en su prestación básica de los servicios sociales tiene la finalidad de llevar a cabo diversas atenciones de carácter doméstico,

.....  
327 Ley 4 de 1993, *op. cit.*

328 Comunidad de Madrid, Ley 11 de 2003, del 27 de marzo, de servicios sociales de la comunidad de Madrid, *Boletín Oficial del Estado (BOE)* 157.

329 Comunidad Autónoma del País Vasco, Ley 5 de 1996, del 18 de octubre, de servicios, *Boletín Oficial del Estado (BOE)* 17.

330 Comunidad Autónoma de Canarias, Ley 9 de 1987, del 28 de abril, de servicios sociales, *Boletín Oficial del Estado (BOE)* 126.

331 Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ley 3 de 2003, del 10 de abril, del sistema de servicios sociales de la región de Murcia, *Boletín Oficial del Estado (BOE)* 35.

social y psicológico para las personas que no puedan realizar las actividades básicas de la vida diaria.

#### Las prestaciones a las personas con carencias o desfavorecidos

En la Comunidad de Cantabria se debe destacar que la Ley 5 de 1992<sup>332</sup> se orientaba hacia las prestaciones complementarias de los servicios sociales, protegiendo a colectivos especialmente desfavorecidos, a las personas que estaban en situación de exclusión social. Por otro lado, también cabe destacar los elementos comunes de la Comunidad de Galicia que se recogen en la Ley 4 de 1993<sup>333</sup>, que manifiesta ser un sistema de protección social orientado a la participación de las personas o grupos, especialmente de aquellos que sufren algún tipo de carencia, marginación o desatención selectiva, lo que implica la asistencia social. La Comunidad de La Rioja, en su Ley 1 de 2002, artículo 34<sup>334</sup>, expresa que “los servicios sociales tienen la finalidad de contribuir al bienestar social mediante la prevención, eliminación o tratamiento, en su caso, de las causas que impidan o dificulten el pleno desarrollo de las personas o grupos que la integran”; por lo que esta ley generaliza a grupos, pero no los especifica.

#### Las prestaciones donde está explícita la persona dependiente

En la Comunidad del Principado de Asturias se puede destacar la Ley 1 de 2003<sup>335</sup>, pues alude genéricamente a la situación y futura prestación de dependencia para el cuidado de las personas. En este sentido, cabe mencionar que en las otras Comunidades autónomas no se comenta en su legislación sobre las prestaciones futuras de la persona con dependencia; la Ley de Dependencia tampoco alude a las futuras prestaciones del cuidado del dependiente, sino a los grados, ya

332 Comunidad Autónoma de Cantabria, Ley 5 de 1992, del 27 de mayo, de acción social, *Boletín Oficial del Estado (BOE)* 181.

333 Comunidad Autónoma de Ley 4 de 1993, *op. cit.*

334 Comunidad Autónoma de La Rioja, Ley 1 de 2002, de 1 de marzo, de servicios sociales, *Boletín Oficial del Estado (BOE)* 79.

335 Ley 1 de 2003, *op. cit.*, artículo 27: “Las prestaciones en materia de apoyo a las personas dependientes consistirán en el conjunto de actuaciones, recursos y medidas que tengan por fin dar una respuesta adecuada a sus necesidades y los correspondientes apoyos a sus familias cuidadoras”.

que el órgano calificador es el que valorará al dependiente y será el que vincula la prestación a la persona dependiente.

#### Los centros de las Comunidades Autónomas

Cabe destacar que la Comunidad Autónoma de Cataluña tiene un elemento diferenciador en cuanto a la modalidad prestacional en centros; en su Ley 22 de 2000, artículo 1, expresa: “El pacto de acogida consiste en la vinculación de una persona o una pareja casada o de manera estable o monoparental”<sup>336</sup>.

#### Otras diferencias en las comunidades autónomas

En la Comunidad de Cantabria se debe destacar que la Ley 6 de 2001<sup>337</sup> daba cierto interés al sistema de atención a las personas dependientes en cuanto a las prestaciones, con una actuación más solidaria. Por otra parte, en la Comunidad de Navarra su Ley Foral<sup>338</sup> incluye una cartera de prestaciones de servicios sociales, reconociendo la universalidad, pero no con una clara expresión. Finalmente, respecto a las ciudades de Ceuta y Melilla, en cuanto al elemento asistencial, están más unidas a la legislación estatal.

#### *Los elementos comunes en las Comunidades Autónomas*

##### La competencia de las Comunidades Autónomas en la dependencia

Por medio del artículo 148.1.20<sup>339</sup>, la legislación española permite a las Comunidades Autónomas asumir competencias en materia de asistencia social; por tanto, la legislación de estas regula la atención a la dependencia a través de

336 Comunidad Autónoma de Cataluña, Ley 22 de 2000, del 29 de diciembre, de acogida de personas mayores, *Boletín Oficial del Estado (BOE)* 29.

337 Comunidad Autónoma de Galicia, Ley 6 de 2001, del 20 de noviembre de protección social, *Boletín Oficial del Estado (BOE)* 230.

338 Comunidad Foral de Navarra, Ley Foral 15 de 2006, del 14 de diciembre, de servicios sociales, *Boletín Oficial del Estado (BOE)* 1.

339 Constitución Española, *op. cit.*, artículo 148.1.20: “Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencia en las materias siguientes: [...] 20ª Asistencia social”.

actuaciones de ámbito local, dirigidas a la cobertura de la asistencia de otra persona mediante ayudas y subvenciones.

### La asistencia social necesaria en las Comunidades Autónomas

Los servicios sociales se dividen en servicios de atención primaria o generales y servicios especializados. Así, los servicios de atención primaria o generales son los más cercanos a los usuarios; su función es la prevención y detección de las necesidades de las personas con discapacidad, además de la prestación de los servicios, su composición es interdisciplinaria y polivalente. Por otro lado, en los servicios sociales de atención especializada su actuación es el área de la dependencia, por cuanto procuran la atención a los dependientes y discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales.

### La Administración Autonómica

A la administración autónoma le corresponde la planificación y programación mediante la elaboración de planes de equipamiento y servicios sociales, por lo que ejerce las facultades de inspección sobre entidades, centros y servicios a través de la consejería competente en materia de bienestar social.

#### *El órgano calificador en la Comunidad Autónoma*

A los efectos del reconocimiento de la situación de dependencia, la Ley 39 de 2006<sup>340</sup> regula un procedimiento estructurado en dos fases. La primera corresponde al órgano de valoración de la situación de dependencia que se haya determinado en cada comunidad autónoma. Este órgano debe emitir un dictamen pronunciándose sobre el grado de dependencia, con especificación de los cuidados que deban requerir. La segunda fase se regula en la ley: “El procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante resolución expedida por la Administración Autonómica correspondiente a la residencia del solicitante y tendrá validez en todo el territorio del Estado”<sup>341</sup>. Así, en esta segunda fase, con resolución favorable al reconocimiento de la situación

340 Jefatura del Estado, Ley 39 de 2006, *op. cit.*

341 *Ibid.*

de dependencia, se puede determinar la existencia en términos de concepto y de derecho a la protección; además, conviene mencionar que todas las Comunidades Autónomas están regidas por centros tanto públicos o privados para las personas con discapacidad; lo anterior como un elemento prestacional o asistencial.